

Opinión

Diario del Huila



Max Duque Gómez, Max Duque Palma María Pía Duque Rengifo
FUNDADORES DIRECTORA

Jhon Fredy Figueroa
EDITOR GENERAL

Linda Vargas
EDITORA PRENSA (E)

Fundado el 8 de Agosto de 1966

ISSN 2215-8952 Impreso en Editora del Huila
Calle 8 N° 6-30 Neiva - PBX: 8712458 - Fax 871 2453

www.diariodelhuila.com e-mail: correolector@diariodelhuila.com



» Editorial «

Rechazamos el vandalismo

El jueves anterior las principales ciudades del país, vieron una intensa jornada de protestas estudiantiles, que inicialmente se creían, iban a ser pacíficas, pero que desafortunadamente algunos desadaptados sociales se infiltraron en las mismas y generaron actos de violencia, que desencadenaron fuertes enfrentamientos con la fuerza pública, que en muchas ocasiones se vieron superados por el accionar violento mediante la utilización de armas no convencionales.

Estamos plenamente convencidos que debe primar, ante todo, las vías del diálogo y la concertación, que tarde o temprano deberán llegar, dado el tamaño de los retos que presenta el sector educativo en el país. Es inaudito, que se utilicen artefactos explosivos, que son típicos de las empleadas por grupos guerrilleros, para lesionar a los integrantes de la Fuerza Pública, cuando intentaban controlar los desórdenes. Se puede protestar de manera pacífica y

ordenada. Los líderes estudiantiles deben comprender que no se pueden vulnerar los derechos de los demás. Esas formas irracionales de protestas no deben permear las sanas movilizaciones para que el Estado atienda sus demandas de mayores recursos para la educación superior del país.

Igualmente, lo sucedido en la Universidad Surcolombiana, se sale del umbral permitido en la sana convivencia que imperar en las protestas sociales. Arremeter contra las instalaciones y equipos académicos de algunas facultades, riñe totalmente con la lógica racional que debe asumir el estudiantado, dadas las limitaciones financieras que posee el primer Centro de Estudios Superiores del departamento. Los daños causados presentan unos costos graves para la universidad y para la vida personal de cada uno de los estudiantes.

Hay que reconocerle al gobierno nacional, la disposición para acceder al diálogo con los diferentes estamentos estu-

diantiles, para buscar una salida concertada a la profunda crisis que presenta la educación superior. Recordemos que el año anterior a raíz de esta situación anormal, el ejecutivo generó un accionar gubernamental, a través del consenso que condujo a superar los niveles de protesta generalizado que se presentó.

La sociedad colombiana, rechaza de plano todo este accionar vandálico, que se generó en las marchas estudiantiles. Se puede decir que es normal y señal de buena salud democrática que la gente se organice para expresar inconformidades y dar a conocer sus posturas políticas, pero esto, no puede darse de tal modo, que sistemáticamente se estén afectando los derechos de la mayoría.

Igualmente, es inaceptable, que se haga las protestas bajo la premisa de que la mejor forma de alcanzar notoriedad y lograr concretar los objetivos es por la ruta del atajo, de ignorar y, de esta manera, destruir los canales institucionales.

La gran provincia gasífera del Caribe colombiano

**CARLOS ALBERTO
LEAL NIÑO**

Las reservas de hidrocarburos en Colombia se traducen actualmente en existencias de 9,8 años para el gas y 6,2 años en crudo. El desarrollo de actividades de E&P Costa Afuera en el Caribe es una de las grandes apuestas para asegurar la autosuficiencia energética a mediano y largo plazo.

La reactivación gradual de la industria, gracias al Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) impulsado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), genera confianza para la exploración y extracción, y en ese sentido incentiva la inversión en proyectos costa afuera en la Región Caribe, un lugar estratégico para el desarrollo de yacimientos principalmente de gas en las áreas primariamente exploradas en esta región.

De acuerdo a la ANH, desde inicios de 2019 el país ha suscrito seis contratos costa afuera, que representan compromisos de inversión por USD \$1.830 millones, en los bloques Gua Off 10 - USD \$90 millones, Tayrona - USD \$140 millones, Col 4 - USD \$350 millones, Gua Off 1 - USD \$350 millones, Col 3 y Gua Off 3 USD \$650 millones, Col 5 - USD \$250 millones.

Además, existen cinco nuevas áreas costa afuera, que serán ofrecidas en la segunda subasta del PPAA. Colombia cuenta con 63.000 MBPE, un alto potencial de recursos prospectivos en el subsuelo marino del Caribe.

Sin embargo, esta es una cuenca práctica-

mente inexplorada, con no más de 70 pozos, incluyendo los del campo Chuchupa-Balleñas, a pesar de que el desarrollo de estos campos no es nuevo, ya que desde 1973 hemos extraído gas de estos yacimientos en el departamento de la Guajira.

Mirando hacia el futuro, los descubrimientos recientes en el Caribe colombiano, a través de pozos exploratorios como los perforados por Petrobras, Ecopetrol y Anadarko en los últimos años, ubican a esta región como vital para el desarrollo de nuevos proyectos en materia de hidrocarburos, y abre un amplio espectro en la oportunidad para generar empleo, preparación de personal técnico, y el establecimiento de centros de servicios logísticos de petróleo y gas.

Las condiciones que favorezcan los costos operativos y las transacciones entre los distintos operadores y proveedores son claves en este proceso. Las zonas francas son un punto importante, porque son una herramienta que facilitará las operaciones e incentivará la inversión extranjera.

Con 108 zonas francas en operación, Colombia concentra el 25% de las 400 que hay en América Latina y se ubica como el país con mayor número de parques industriales en el continente, según datos de la Asociación Nacional de Empresarios de 2017, y la región Caribe con Barranquilla a la cabeza, ha venido posicionándose como un líder logístico para los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el futuro.

El momento de alinear y coordinar esfuerzos para el desarrollo de la cuenca es una tarea que requiere de una columna completa en www.diariodelhuila.com

10 años del Sancionatorio Ambiental

**ÁLVARO
HERNANDO
CARDONA
GONZÁLEZ**

alvarohcardona@hotmail.com

El 21 de julio del año 2009, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sancionó la Ley 1333 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental vigente hoy día. Es decir, es un conjunto normativo que cumplió diez años.

La crisis ambiental que vive actualmente la humanidad, supone el desafío de desarrollar herramientas para prevenir y controlar las causas del deterioro ambiental. Así los Estados se ven obligados a implementar normas jurídicas que les permitan sancionar las acciones u omisiones que atentan contra el ambiente y sus recursos naturales. Colombia, desde la Ley 23 de 1973 lo ha manifestado así.

Varios centros de pensamiento, las autoridades ambientales, algunas pocas entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han organizado eventos alusivos a este suceso. Y pronto, en noviembre 20-22, en Bogotá, la Universidad Externado de Colombia desarrollará las "XXI Jornadas Internacionales en Derecho del Medio Ambiente" con el objeto de analizar el Procedimiento Sancionatorio Ambiental.

Esta semana que pasó se realizó otro evento en Bogotá organizado por una empresa consultora en el que participaron varios fun-

cionarios de Neiva y Pitalito, pero además casi cuarenta personas más en el que este tópico también se mencionó durante dos horas de debate intenso. De hecho el autor de esta columna interviene durante las Jornadas Internacionales que cada año organiza la Universidad Externado de Colombia ya mencionada atrás, con una ponencia en la que expondremos la necesidad de que el Estado colombiano tome la decisión de aplazar durante un periodo racional la obligación de iniciar procesos sancionatorios estimulando en vez de ello que los ciudadanos de una vez por todas registren y hagan el censo de los usos de los recursos naturales renovables para lograr: 1. Disminuir los procesos sancionatorios de que trata la Ley 1333 y eso permita que las autoridades ambientales se ocupen mejor de extremar la administración del ambiente natural y los recursos que ofrece este; 2. Ahorrar costos fiscales importantes que es mejor destinarlos a la conservación y recuperación ambientales; 3. Ahorrar costos a los usuarios del medio ambiente y mejor destinarlos a las actividades de recuperación ambiental; 4. Hacer un eficaz inventario de usos, necesidades, impactos y ubicación de los recursos naturales, hoy prácticamente inexistente; y 5. Efectivar la labor posterior de las autoridades ambientales para de verdad señalar y condenar a quienes ilícitamente usan e impactan el medio natural nacional.

Los 10 años del régimen sancionatorio deben servirnos para recuperar el Medio Ambiente.